Sentencia 6

Tipo de asunto y número de expediente	Recurso de apelación penal 3/2020
Órgano jurisdiccional	Décimo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito
Magistrado	Rubén David Aguilar Santibáñez
Parte quejosa y/o recurrente	Persona privada de la libertad que solicita un traslado
Autoridad responsable y/o órgano jurisdiccional cuya sentencia se recurre	Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juzgado de Ejecución
Fecha de la sentencia	25/02/2020

Tema: Traslado voluntario de personas privadas de libertad para garantizar el derecho humano a compurgar la pena en el lugar más cercano a su domicilio.

¿Qué pasó?

- Una persona privada de la libertad ubicada en un centro penitenciario federal en Baja California pidió ser trasladada a un centro penitenciario estatal ubicado en Sonora. La persona justificó su solicitud en el artículo 18 constitucional, el cual establece que las personas sentenciadas tienen el derecho a compurgar su pena en el establecimiento carcelario más cercano a su domicilio, con excepción de aquellas personas sentenciadas por delitos relacionados con delincuencia organizada o que requieren medidas especiales de protección.
- La Juez de Ejecución que estudió el asunto negó la solicitud, ya que los artículos 49 y 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen los requisitos para realizar traslados voluntarios, incluyendo el que exista un convenio entre la Federación y las entidades federativas de los centros que se tratan. En el caso concreto, la Federación no tenía un acuerdo con el Estado de Sonora, por lo que la Juez consideró improcedente la autorización para que el solicitante fuera trasladado.

- En contra de esa decisión, el solicitante interpuso un recurso de apelación, argumentando que los artículos citados por la Juez son contrarios a la Constitución, ya que violan el derecho humano de las personas privadas de libertad a cumplir sus penas en el lugar más cercano a su domicilio.

¿Qué resolvió el Tribunal?

- Estimó fundados los argumentos del solicitante respecto de la incorrecta decisión de la Juez de negar la solicitud.
- El Tribunal Unitario consideró necesario realizar un ejercicio de interpretación conforme, con el objetivo de evitar declarar inconstitucionales los artículos citados en el asunto. En específico, el Tribunal argumentó que el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se puede interpretar de forma que se admitan traslados voluntarios incluso cuando no existan convenios o acuerdos entre las entidades o la Federación. Por lo tanto, ante una falta de convenio, el Tribunal indicó que la persona juzgadora deberá ponderar y estudiar las circunstancias particulares del caso para resolver si concede o niega la solicitud.
- A través de esta interpretación, el Tribunal le dio un significado a la norma de tal forma que no fuera contraria a la Constitución y al derecho humano de ser trasladado a un lugar más cercano a su domicilio, ya que no sería aceptable que dicho derecho fundamental se encuentre condicionado a decisiones que toman las autoridades penitenciarias sobre los acuerdos a nivel federal y estatal.
- Por lo tanto, revocó la decisión de la Juez de Ejecución y ordenó reponer el procedimiento para que la Juez tomé en consideración una interpretación de los artículos 49 y 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que sean consistente con la Constitución y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad reconocidos en ésta.